



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso	Ordinario Laboral
Radicación	05001-31-05-020-2018-00377-02
Demandante	Nubia Ester Londoño Martínez
Demandado	Colpensiones
Asunto	Apelación auto aprueba liquidación de costas
Procedencia	Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente	Sandra María Rojas Manrique
Tema:	Tarifas en agencias en derecho

Medellín, enero veintinueve (29) de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como Magistrada sustanciadora, decide el recurso de **Apelación** interpuesto por la señora apoderada de la parte demandante en contra del auto proferido por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín el 8 de septiembre de 2020, por medio del cual se liquidaron y aprobaron las costas procesales, en el trámite del proceso ordinario laboral de la referencia.

1.- ANTECEDENTES

La señora Nubia Ester Londoño Martínez, instauró demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones, pretendiendo, previa declaración del derecho a la pensión de invalidez post mortem del señor GUILLERMO DE JESÚS VILLA FLÓREZ, se condene a Colpensiones a reconocer en su favor y en calidad de

cónyuge, la sustitución pensional; rituada la instancia, el Juzgado de conocimiento, profirió sentencia condenatoria, accediendo a las pretensiones el 17 de enero de 2020 (véase folios 147 a 148).

Esta Sala de Decisión Laboral mediante sentencia proferida el 3 de julio de 2020, adicionó la Sentencia de primera instancia, en el sentido de indicar que el causante causó en vida la pensión de invalidez a partir del 17 de mayo hasta el 14 de junio del 2017, generando un retroactivo de \$663.945, cuyo pago debía realizarse por Colpensiones, a los herederos debidamente acreditados (véase folios 157 a 165).

2.- AUTO APELADO

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido el 8 de septiembre de 2020, liquidó y aprobó las costas procesales, así, agencias en derecho en primera instancia \$1.755.604, agencias en derecho en segunda instancia \$0, para un total de \$1.755.604.

3.- APELACION PARTE DEMANDANTE

La apoderada de la parte demandante interpuso recurso reposición y en subsidio apelación contra el auto del 8 de septiembre de 2020, mediante el cual se aprobó la liquidación de las costas procesales, el cual sustenta en que las costas liquidadas, resultan insuficientes, en la medida en que, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso, en sus numerales 4 y 5, y en consideración al Acuerdo PSAA16- 10554 del 05 de agosto de 2016 “por medio del cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, el Juzgado con base en determinados criterios objetivos, puede calcular el valor de la condena entre el 3% y el 7.5% de lo pedido, es decir, hasta por valor de \$2.664.416.

De igual forma impugna el auto, en tanto no se incluyó, la condena fijada en segunda instancia por parte del H. Tribunal Superior de Medellín, el cual adicionó

la Sentencia, incluyendo \$663.945, por concepto de retroactivo causado en vida, contrariando lo establecido en el artículo 366 numeral 2 del Código General del Proceso.

Aduce también, que, de conformidad con las normas previamente citadas, el juzgado debe tener en cuenta factores como el tipo de proceso adelantado, la gestión realizada por el apoderado y el tiempo que se tardó en impartir justicia, extrañando el valor fijado, en la medida en que el proceso se radicó desde febrero del 2018, tardándose más de dos años en actuar la justicia, periodo en el cual nunca faltó la diligencia y cuidado de la apoderada en las diferentes etapas del proceso, máxime si se considera que por el tipo de proceso y por su naturaleza, el litigio giró en torno a derechos fundamentales.

4.- ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para alegar de conclusión, se pronunció el apoderado de Colpensiones, indicando que la parte actora solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez post mortem, lo cual es una pretensión no pecuniaria, por lo que la liquidación de las costas y agencias en derecho, deberá establecerse en salarios mínimos, con base en lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554, las cuales deben de oscilar, entre 1 y 10 salarios mínimos legales mensuales, tal y como lo hizo el Despacho, quien lo estableció en dos salarios mínimos, liquidación que se encuentra conforme a derecho y no debe de ser modificada.

Por su parte, la apoderada de la parte actora, indicó que en el proceso, se formularon pretensiones que fueron resueltas de manera favorable a los intereses de la actora, condenas que afirma ascendieron a la suma de \$35.525.548, indicando que el Acuerdo PSAA16-10554, establece que el valor de las agencias en derecho, será hasta del 7.5% de lo pedido, es decir, se pueden fijar hasta en la suma de \$2.664.416, por lo que considera que las agencias fijadas por el Despacho, deben de corresponder a un valor mayor, ya que se deben de tener en

cuenta factores como el tipo de proceso, la gestión realizada por el apoderado y el tiempo en que se demoró en impartir justicia, proceso que informa, tardó más de dos años.

Reitera que no se incluyó por parte del Juzgado, la condena fijada en segunda instancia por el H. Tribunal Superior de Medellín, quien adicionó la sentencia, condenando a Colpensiones a pagar \$663.945, por concepto de retroactivo causado en vida por el causante, solicitando que las costas sean fijadas en la suma de \$2.664.416.

5.- CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación de conformidad con el artículo 57 de la ley 2 de 1984, y los artículos 65 y 66 del CPL y de la SS, modificados por los artículos 29 y 35 de la ley 712 de 2001.

5.1. Problema Jurídico

Debe determinar la Sala:

¿Si el auto proferido el 8 de septiembre de 2020, por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, mediante el cual se aprueban las costas procesales liquidadas, incluyendo como total de agencias en derecho, de primera y segunda instancia, la suma de \$1.755.604, se ajusta a los parámetros normativos o si, por el contrario, la tarifa de agencias en derecho, debe ser incrementada como lo solicita la apoderada recurrente?

5.2. Tesis

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual, las agencias en derecho fijadas por la A quo, se encuentran dentro de los parámetros normativos, por lo tanto, la providencia recurrida debe ser confirmada.

5.3. Premisas Normativas

En lo atinente a la fijación de agencias en derecho, el numeral 4° del artículo 366 del Código General del Proceso, preceptúa:

“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”

Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, que en el artículo 5, regula las agencias en derecho a favor del trabajador, afiliado o beneficiario, en los procesos ordinarios laborales de primera instancia, así:

“a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido

(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V”.

Precisa también el artículo 2° del Acuerdo referenciado, que al momento de fijar las agencias se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

“Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la

parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”

Por su parte, el artículo 5° numeral 1° estipula como tarifa para tasar las agencias en derecho de proceso declarativos de primera instancia, lo siguiente:”

5.4. Caso Concreto

En el sublite se condenó a Colpensiones a pagar a la demandante, en calidad de compañera permanente del causante, la pensión de sobrevivientes, cuantificándose como retroactivo desde el 15 de junio del 2017 hasta enero del 2020, la suma de \$27.332.333, ordenando que para febrero del 2020, Colpensiones incorpore en la nómina de pensionados a la accionante, pagando como mesada pensional, un salario mínimo legal, autorizando a la accionada, a descontar del retroactivo el valor reconocido a los herederos del causante, como liquidación de la pensión que dejara el mismo, que ascendió a \$4.008.361; reconoció la indexación de las condenas, la cual cuantificó en \$2.150.117; absolvió a la demandada de la pretensión de los intereses moratorios. Esta corporación, por medio de Sentencia del 3 de julio del 2020, adicionó el numeral primero de la Sentencia, declarando que el causante causó en vida la pensión de invalidez, a partir del 17 de mayo hasta el 14 de junio del 2017, generando un retroactivo de \$663.945, cuyo pago debería de realizarse por Colpensiones, a los herederos debidamente acreditados.

El retroactivo causado hasta la sentencia de primera instancia, corresponde a \$27.332.333 y la indexación liquidada en la providencia, asciende a \$2.150.117, valores que suman \$29.482.450, más los \$663.945 reconocidos por esta corporación, al momento de resolver la segunda instancia, ascendiendo la condena a \$30.146.395, valor al cual se le debe de descontar \$4.008.361, correspondiente a los dineros reconocidos a los herederos del causante, por lo que la condena quedó en \$26.138.034, sobre ese valor, la tarifa fijada por la Juez corresponde al 6.71%, que se encuentra dentro del parámetro normativo ya citado, que establece como límite máximo el 7.5%, en procesos de mayor cuantía.

Ahora bien, aduce la recurrente que no se incluyó la condena fijada en segunda instancia, en donde se adicionó la Sentencia, incluyendo \$663.945, por concepto de retroactivo causado en vida, contrariando lo establecido en el artículo 366 numeral 2 del Código General del Proceso, sin embargo, la referida suma está incluida en los \$26.138.034, que sirven de parámetro para aplicar la tarifa del 6.71%.

Respecto a los criterios para fijar la tarifa máxima de agencias en derecho, debe señalar la Sala que, no puede considerarse que se trató de un proceso complejo, en tanto resultaba claro el cumplimiento de los requisitos de orden legal para la causación de la pensión de invalidez post mortem, siendo un proceso de mediana complejidad, en el cual todo el esfuerzo probatorio estaba dirigido, principalmente a acreditar la calidad de beneficiaria de la demandante, respecto de la prestación deprecada, al punto que en segunda instancia, la entidad de seguridad social no discutió el reconocimiento del derecho, pues ni siquiera interpuso recurso de apelación frente a la Sentencia. Ahora, no se discute la diligencia en la actuación de la apoderada judicial de la promotora del proceso, como debe corresponder a las obligaciones que derivan del mandato que le fue conferido, sin que se evidencien gestiones especiales que den lugar a una tarifa superior en la fijación de las agencias en derecho.

Por lo anterior, el auto recurrido deviene ajustado a derecho y por lo tanto debe ser CONFIRMADO.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín



RESUELVE

PRIMERO: Se CONFIRMA el Auto que aprueba la liquidación de las costas procesales, proferido por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, el 8 de septiembre de 2020, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin lugar a COSTAS procesales.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No.**015** fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 1 de febrero de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario